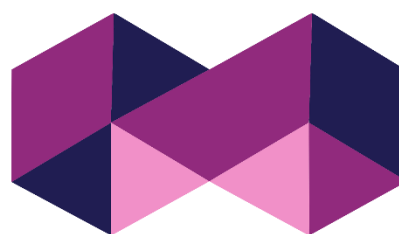


2018

# La administración de Raúl Leoni y el combate a la guerrilla

**XVIII Jornadas de  
Historia UCAB**

EDGARDO MONDOLFI G.  
INSTITUTO PROGRESITA | Caracas - Venezuela



INSTITUTO  
**PROGRESISTA**



“Pensar es moverse en el infinito”

## DISIPANDO LOS MITOS:

**Por Edgardo Mondolfi Gudat.**

Más que de la guerrilla propiamente dicha, me corresponde hablar acerca de Leoni en relación a la guerrilla y, particularmente, del tipo de modalidad insurgente que le tocó afrontar entre 1964 y 1968. En este sentido, y justamente para hacer un breve recorrido acerca de los puntos que mayormente saltan a la vista, me propongo dividir lo que a continuación sigue en tres breves partes con el fin de transitar el tema.

### **1.- Una guerrilla distinta.**

Mientras el estímulo a la insurrección por la vía de distintos dispositivos habrá de ser el signo característico con que la izquierda violenta habría de desafiar al gobierno de Rómulo Betancourt entre el año 62 y fines del 63, Raúl Leoni habrá de enfrentar en cambio el reto de oponerse a una gramática guerrillera que actuaría casi exclusivamente en clave rural y dentro del marco de la llamada “guerra prolongada”. El punto amerita algunas precisiones. En primer lugar, todo cuanto definió la guerra contra Betancourt por parte de la izquierda se resumió en expresiones que remedaban la concepción leninista orientada a la toma rápida y directa del poder. Se tratará, en resumen, de una fórmula polivalente concebida para enfrentar a Betancourt en el terreno de la violencia bajo modalidades distintas y, en muchos casos, simultáneas.

Esto quiere decir que el esquema inmediateista de ese periodo 62-63, pretendía combinar alzamientos de tipo militar a partir del contacto de la izquierda con facciones desafectas en los cuarteles con la actuación de unidades que operaban dentro del formato del “guerrillerismo urbano”, muy al estilo del Frente de Liberación Nacional argelino. Hasta ese punto, la guerrilla de tipo rural, incipiente y embrionaria (puesto que sus operaciones se verían aún muy limitadas durante este tiempo), no sería la determinante del proceso sino que actuaría más bien como soporte al tipo de guerra que se libraba en clave urbana.

Por un lado, el revés que supusieron las operaciones insurreccionales militares del 4 de mayo en Carúpano y del 2 de junio en Puerto Cabello, en 1962 y, por el otro, los limitados dividendos obtenidos a partir de acciones “efectistas” que tuviesen por objeto elevar la tensión y la temperatura política del momento, y cuyo punto más alto sería el intento por descarrilar la cita electoral prevista para diciembre de 1963 a través del llamado “Paro Armado” que condujese a deslegitimar, o al menos, debilitar, el triunfo del sucesor de Betancourt en esos comicios presidenciales, condujo a darle un vuelco a la forma como venía concibiéndose la lucha armada hasta ese momento.



“Pensar es moverse en el infinito”

De allí que, entre otras cosas, no sólo los cuarteles como tales no volvieran a reaparecer dentro del escenario de la insurrección armada, sino que los promotores de la empresa insurgente comenzaran a formular una acerada crítica dirigida precisamente a descalificar la técnica del golpe militar (es decir, del *putchismo*) con el fin de poner el énfasis en otro tipo de táctica, comenzando por darle un carácter expansivo a los núcleos guerrilleros.

Tal vez otros elementos pudiesen contribuir a explicar también las mudanzas que experimentara la línea de la violencia a partir de 1964 y hasta 1969; pero, agregando a lo ya dicho en cuanto a los cuestionables resultados que arrojaría la prédica de combinar la mayor cantidad posible de formas de lucha en el plano urbano, acuden al menos dos que resultan evidentes. El primero marcha en consonancia con el empeño de los núcleos armados de pasar por encima de los órganos de dirección de los partidos ilegalizados (PCV y MIR). Esto, que podría denominarse el “desbordamiento” de los aparatos de guerra, comenzó a darse en respuesta a la forma cómo, desde las instancias directivas de los partidos de izquierda (cuyos máximos dirigentes cargaban encima con autos de detención o se hallaban ya en presidio), se interpretara negativamente el resultado del “Paro Armado” llamado a alterar los comicios del 63, dando lugar, a partir de ese punto, a la necesidad de repensar la guerra o, dicho de otro modo, de liquidar la vía armada y sustituirla por otras fórmulas que permitiesen proseguir el enfrentamiento contra la –ahora- nueva gestión de Leoni.

Esta meditación hecha por los altos dirigentes desde la cárcel, o desde los predios de la clandestinidad (y la cual haría especial énfasis en la necesidad de recuperar la política de masas), se traducirá, con el correr del tiempo, y especialmente como resultado del VIII Pleno del Comité Central del PCV, en la tesis de la llamada “Paz Democrática”, embrión del repliegue que llevaría a intentar recobrar las vías legales, transitar el camino de una tortuosa legalización y, a fin de cuentas, aterrizar lo más suavemente posible en el terreno electoral. Cabe subrayar además que no se trataría sólo, en este caso, de las distintas posiciones que anidaban en el seno del PCV sino de las que emergerían también dentro del MIR.

El problema, aunque jamás manifestado de tal forma en tiempos de Betancourt (cuando el frente insurreccional parecía lucir compacto) remitía a tensiones de vieja data. A fin de cuentas, las posiciones pro y anti-lucha armada dentro de la izquierda serán posiciones que tendrán vida desde un principio, pero será sólo ahora cuando adquieran carácter de grupos opuestos y contradictorios, y con una actuación visiblemente diferenciada.

El resultado de todo ello será, pues, el afloramiento de irremediables fisuras que se plantearían a partir de entonces entre “blandos” y “duros”, es decir, entre los “pacifistas” y quienes, por el contrario, no sólo pretenderán seguir alentando “con las armas en alto” la lógica de la guerra sobre bases más firmes, sino que acusarán a esa alta dirigencia, comprometida hasta entonces con la violencia, de asumir



“Pensar es moverse en el infinito”

actitudes claudicantes o de regresar simplemente a los viejos formalismos propios de la cultura política del PCV.

De seguidas cabe destacar el segundo, entre la lista de elementos adicionales, que pudiese explicar que, frente a lo que significaran formas más urbanas que rurales de lucha durante la gestión de Betancourt, se desembocara ahora en la modalidad de “guerra prolongada” que sería el signo característico del accionar insurgente durante todo el periodo de Leoni hasta su etapa, ya residual, en 1969.

Ese elemento es, sin más, lo que significara que los sectores dispuestos a proseguir la guerra ya no pensarán en términos de un aparato armado abocado a la realización de acciones inmediatistas sino llamado a trabajar más bien en función de un enfrentamiento a largo plazo. Y, en el camino a diseñar esta nueva etapa, los “guerrerristas” no sólo ratificarán como fuente de inspiración lo que significara la experiencia cubana sino que ensayarán a la vez con nuevos aprendizajes gestados en otros domicilios no-soviéticos, especialmente, los derivados del mundo emergente. Como resultado de ello, el calco al carbón de la experiencia china –o incluso vietnamita- determinará ese giro definitivo hacia el guerrillerismo rural que habría de caracterizar el enfrentamiento contra Leoni. Ésta era –si se quiere- una forma de re-enfatizar que la de Venezuela era una lucha “de Liberación Nacional”, al estilo de las planteadas en Asia y África, donde los grupos armados también cuestionaban el dogmatismo soviético. Al enfrentarse así a quienes ahora recomendaban el “repliegue”, la tesis de los “guerrerristas” será en cambio la de “la guerra prolongada”, modalidad que no por delirante dentro de la conducta de una izquierda insurreccional habituada al tanteo, la improvisación, el ensayo y el error, dejaría de constituir la etapa más tenaz y sostenida de la lucha armada, o sea, aquella que –como se ha dicho- habría de librarse entre 1964 y 1969.

Aparte de que la “guerra larga” exigiría una ubicación espacial distinta del conflicto, llevando, por tanto, a que la totalidad del movimiento armado se desplazara al medio rural, cabe ser enfático en relación a Cuba como fuente aún más decisiva de inspiración durante esta nueva etapa. Si antes había sido cuestión, por un lado, de una solidaridad expresada en términos “propagandísticos” y, por el otro, de cierto grado de inversión en armas y apoyo material, la intervención de La Habana se traducirá a partir de entonces, y como no había ocurrido jamás en tiempos de Betancourt, en la provisión directa de combatientes para alimentar los frentes armados rurales e intentar corregir así los errores tácticos y de concepción cometidos durante la primera fase de la lucha insurreccional.

En resumen: todo lo dicho explicaría varias cosas a la vez. Explicaría, en primer lugar, que la insurgencia local no sólo empleara con mucha mayor determinación lentes castristas sino que, además, comenzase a calzar lentes maoístas. En segundo lugar, explicaría mejor que nada el salto cuantitativo que



“Pensar es moverse en el infinito”

Cuba habría de describir como centro rector de la insurgencia venezolana durante la etapa gubernamental de Leoni. Y explicaría, además, otra cosa: la profundización de la agria polémica entre “duros” y “blandos”, es decir, cuando se haga completamente evidente que las diferencias entre ambas parcelas eran ya materialmente insuperables. Ello ocurrirá una vez que el propio Fidel Castro anuncie a los cuatro vientos su decidido apoyo a quienes veían necesario proseguir la guerra y, de manera inversa, haga pública condena de los “claudicantes” e “indecisos” elementos que formaran parte del elenco dirigente del MIR, así como de los órganos de dirección del PCV que entonaban el lenguaje de la Paz Democrática.

## 2.- Una respuesta distinta

Todo esto habla a las claras de una situación a partir de la cual el gobierno de Leoni podía derivar inteligente provecho en vista de la ruptura que había venido registrándose de manera cada vez más aguda entre los dos bandos de la izquierda desde 1963 y para insistir, una vez más ante sus propios partidarios, en que la división entre “blandos” y “duros” no era algo ficticio ni aparente.

Aquí asoman dos elementos de valía que habrán de distinguir de manera significativa un quinquenio del otro frente al problema de la violencia o, dicho de otro modo, asoman dos circunstancias no presentes durante la gestión de Betancourt. Hablamos, por un lado, de la ruptura de Cuba con el alto mando del PCV y, por el otro, el empeño de algunos sectores por mantener en pie el esquema insurreccional de tipo guerrillero.

Sin duda, estas diferencias las imponía un entorno cambiante en el marco de la dinámica armada; pero existían al mismo tiempo otras diferencias que parecían responder más bien al estilo de liderazgo que habría de exhibir el nuevo mandatario con respecto a su antecesor. Esto explicaría naturalmente la adopción de un enfoque distinto en relación al tema de la violencia insurreccional. El punto es importante, sobre todo frente a una tradición que ha insistido en despojar a Leoni de toda autonomía en muchos aspectos de su administración o diluirlo así, sin más, dentro de las ejecutorias de Betancourt. En este sentido, puede que existiera un programa conjunto entre ambos gobiernos o una lógica estructurada en torno a la planificación central democrática; pero también existían importantes diferencias de estilo y liderazgo entre los dos mandatarios. Tal cosa podría resumirse diciendo que la “continuidad” que garantizaba Leoni no debía interpretarse en ningún caso como sinónimo de “continuismo”.

Aparte de todo está el hecho de que se tratara de dos regímenes coalicionistas distintos: primero el de Betancourt -junto a AD, COPEI (y, por breve tiempo, URD)- y segundo, el de Leoni, junto a AD (acompañado también, durante breve tiempo, por URD) y el FND, liderado por Arturo Uslar Pietri. La principal y más significativa diferencia entre ambas coaliciones radica en el caudal electoral recibido por cada uno de los dos presidentes, así como en los propósitos que animaba a las



“Pensar es moverse en el infinito”

distintas alianzas: la primera, con el fin de estabilizar el ensayo democrático en su etapa inicial; la segunda, para gobernar en toda regla, tomando en cuenta además que, aun cuando la cifra del electorado nacional hubiese crecido desde 1958, Leoni apenas se alzó con el 32,80% frente al 49,18% con el cual resultó favorecido Betancourt, representando de este modo una disminución del 16% para los cómputos de AD. La revista *Momento* lo pondría así, por más paradójico que ello pudiera sonar: “Acción Democrática triunfó en las elecciones, pero perdió”.

Otra diferencia visible, y sobre todo pertinente a los fines de lo que pretende afirmarse, es que se trataba de una violencia heredada y, por tanto, los dos años y medio de guerra que habían transcurrido hasta entonces entre el gobierno de Betancourt y la izquierda en armas permitía pensar en la posibilidad de que se asumieran nuevos enfoques con respecto al fenómeno de la violencia, algo en torno a lo cual los nuevos socios tripartidos coincidirían en grados más o menos variables. Además, ello se vería claramente recogido en el acuerdo programático de la Amplia Base adoptado en octubre del 64, varios meses después de haber asumido Leoni, y luego de arduas negociaciones entre los tres factores de poder. Hablamos justamente en este caso de lo que significaría la integración de un gobierno de AD junto a dos fuerzas (URD, capitaneada por Jóvito Villalba y el FND, liderado por Uslar Pietri) que habían discrepado, cada cual a su modo, de la estrategia anti-insurreccional manejada hasta entonces por Betancourt.

A la hora de las diferencias que cabe observar entre ambos gobernantes cuando de aplicar algunas variantes específicas al fenómeno de violencia se trataba, asoma otra particularidad bastante relevante y que, por ello mismo, se hace preciso tener en cuenta. Nos referimos al hecho de que la candidatura de Leoni no sólo nacería al calor de un sentimiento de ruptura de la alianza con Copei sino que se fraguó en buena medida gracias al apoyo del Buró Sindical de AD, el cual planteaba, entre otras cosas, la idea de buscarle una salida diferente al tema del enfrentamiento con los grupos armados.

También pesa mucho a este respecto lo que diría la propia izquierda –o al menos parte de ella- al subrayar las diferencias que creía percibir entre Betancourt y Leoni. De hecho, en ningún caso se verá con mayor evidencia la separación que comenzaba a gestarse entre “duros” y “blandos” como a la hora en que la izquierda se detuviera a analizar si Betancourt y Leoni eran químicamente equivalentes o, en otras palabras, considerar que Leoni podía ser capaz de exhibir un estilo propio y, por ello mismo, darle un tratamiento diferente a la izquierda en la medida en que el ya mencionado “Gobierno de Amplia Base” fuese garantía de la presencia de otras voces y sensibilidades como las que podían representar Uslar, a través del FND, o Villalba, por medio de URD.

Sin embargo, la diferencia esencial entre ambos mandatarios a la cual quisiéramos hacer referencia de seguidas tiene que ver con el estilo francamente polarizador que caracterizara a Betancourt dentro de la propia escena nacional. Así,



“Pensar es moverse en el infinito”

para quienes vieron que Betancourt había emergido intacto luego de su quinquenio y que, derrotada la fórmula de la abstención electoral, verían a Leoni instalado ahora en el poder, se hacía necesario redirigir los pasos y reorientar los objetivos del movimiento revolucionario. Por tanto, la necesidad de repensar la guerra como método tras el resultado de las elecciones que le dieran el triunfo a Leoni será, como se dijo, el primer paso emprendido por cierto sector de la izquierda hacia la formulación de lo que vendría a conocerse a la larga como la “Paz Democrática”, en consonancia con la acción rectificadora. No obstante, para el sector que continuaba apegado a la línea armada, a Leoni sólo podía leerse con base en los mismos “contenidos de clase” y en apego a la misma “estructura represiva” que le había dado piso al gobierno de Betancourt. Se tratará según este parecer –y para decirlo de algún modo- del “betancourismo continuado por otros medios”.

Sobra decir desde luego que Leoni no abandonaría en ningún caso el lenguaje de la guerra durante sus cinco años de gobierno. Antes bien, la ejecución de operaciones contra-insurgentes cobrará mayor nivel de sofisticación y tecnicismo durante su quinquenio comparado a los tiempos de Betancourt, amén de que será sólo a partir de entonces cuando, al decretarse la “guerra prolongada”, el Ejército asuma plenamente su responsabilidad en el combate, superando de este modo la impericia que supuso haber dejado en manos de organismos policiales y de inteligencia la labor fundamental del enfrentamiento contra los grupos armados. También incidirá en ello –por tratarse de la “guerra prolongada”- un cambio de teatro (del medio urbano al medio rural), lo cual implicaría la drástica reconversión de unas FF.AA. que habían sido concebidas hasta entonces –doctrinalmente hablando- a partir de una estructura divisional y con base en la hipótesis de conflictos de tipo convencional, para adecuarse a la dinámica de una guerra irregular que exigía la conformación de unidades móviles de combate y, junto a ello, el particular tipo de capacitación técnica para oficiales y tropa que ello requería.

Mas sin embargo no sólo –o exclusivamente- de guerra estaría hecha la estrategia de Leoni. De allí que, a raíz del enfrentamiento que se registraba entre quienes se situaban ahora en posición de regreso y quienes abogaban en cambio por intensificar la lucha armada bajo nuevas premisas, el gobierno de Leoni tuviese la suficiente claridad (y habilidad) para hacer distingos que le arrojaran dividendos y profundizar en todo lo posible tales diferencias.

Agustín Blanco Muñoz resumirá todo esto así, desde la perspectiva del nuevo Presidente: “La línea de actuación del gobierno ha sido expresada claramente por Raúl Leoni desde el momento de la toma del mando. (...) [L]a era de la violencia abierta, agresiva, rica en alardes y verbalismos finaliza y da paso [a juicio del nuevo mandatario] al momento de la “ponderación, la concordia y la reconciliación”, el llamado al diálogo, el intento de pacificación, el *tender la mano* a quienes rectifiquen, a quienes entiendan la necesidad de volver (...) a la lucha legal”.



“Pensar es moverse en el infinito”

### 3.- La “Proto-pacificación”

Sin embargo, los reparos a la nueva política de *mano tendida* alentada por Leoni procederán de sectores opuestos entre sí. Es decir, no sólo provendrán del sector “anti-dialogante” del movimiento revolucionario (es decir, de los “duros”) sino también de ciertos núcleos del propio estamento político —e incluso, de otros factores de poder y sectores de la sociedad- que creían ver en la táctica de la Paz Democrática un mero recurso retórico de la izquierda para engañar y confundir al gobierno mientras se fuesen creando las condiciones necesarias para un nuevo “asalto revolucionario”.

Un caso muy significativo entre las propias filas del oficialismo lo representará el ex Ministro de Relaciones Interiores, diputado y por entonces jefe de la fracción parlamentaria de AD en la Cámara Baja, Carlos Andrés Pérez, quien mostraría durante sus intervenciones una actitud de permanente recelo frente a lo que podía entrañar la “palabra empeñada” por la izquierda a la hora de llevar a que el gobierno tendiese puentes y propiciara el diálogo.

Empero, más preocupante aún será la reserva mostrada por los propios militares ante las aperturas practicadas por Leoni. De hecho, el Presidente debió haber tenido que muñequear con fuerza a la hora de vencer la resistencia de las FF.AA. e intentar impulsar una política distinta frente al fenómeno de la violencia extremista y, por tanto, al pasar por encima del sector castrense a fin de que su voz llegase a oídos de quienes pretendían renunciar a la vía insurreccional.

Además, tal vez uno de los elementos más significativos en todos los discursos en los cuales Leoni aludió al tema de la política insurreccional y el manejo de la violencia fuese su estilo totalmente “anti-betancourista”, tal como quedara patentado al haber dicho lo siguiente al no más comenzar su Presidencia: “[N]o cerraré nunca los caminos que conduzcan a la concordia nacional”. Ese lenguaje no había sido escuchado prácticamente en ningún momento durante el quinquenio de su predecesor, ni tan siquiera al cierre del mismo cuando, a propósito de su último mensaje presidencial, Betancourt tuvo esto que decir al referirse a los presos políticos: “Están encarcelados porque son agentes de una conspiración extranjera contra la paz, la libertad y la soberanía de Venezuela. La democracia no es un régimen laxo y medroso frente a sus enemigos”.

Si bien nada de esto impidió que Betancourt dispensara algunas medidas puntuales de gracia, amparándose para ello en las facultades que le brindara su condición de Presidente, sólo una serie de circunstancias un tanto distintas entre la primera y segunda mitad de la década de 1960 podrían explicar que el ahora exmandatario se hubiese visto envuelto en una dinámica polarizadora que él mismo se había hecho cargo de estimular al máximo para deslindar las aguas en el momento en el cual resultaba preciso hacerlo. E incluso, para ir más allá, tal vez no se tratara solamente de dividir las aguas de manera violenta sino de legitimar de





“Pensar es moverse en el infinito”

ese modo el miedo al llamado “peligro comunista”, elemento que se añadió a la lista de los estigmas más característicos de la Guerra Fría.

Habrà, pese a todo, varios factores que compliquen la oferta pacificadora de Leoni a lo largo de su quinquenio. Para comenzar, el más importante podría resumirse en la clásica imagen del huevo o la gallina: legalizar primero a las organizaciones en armas para que, a la postre, pudiesen pacificarse progresivamente o, la que sería más bien la tesis prohijada por el propio Presidente: que los movimientos armados se pacificaran primero para ser legalizados después. Importa subrayar entonces que Leoni exigiría de entrada, como parte de su nueva política, el requisito *sine qua non* del desarme, el desmantelamiento total de los aparatos de guerra y la desmovilización de los combatientes como única forma de conjurar el riesgo de que subsistiese cualquier ambigüedad por parte del movimiento armado. Esto llevaría incluso a que, dentro del capítulo de cargos, tal fuese una de las razones invocadas por Uslar y los suyos a la hora de justificar su salida del acuerdo tripartito, al discrepar de la forma en que Leoni, supuestamente, conducía la Pacificación a partir de una concepción inmutable y unívoca del fenómeno guerrillero. Sin embargo, para AD, no quedaban dudas: Leoni había invitado a la rectificación desde que tomara posesión de la jefatura del Estado en marzo del 64, demostrando así frente al país, y ante sus propios socios de la Amplia Base, que había tenido voluntad “pacifista”; lo que no había tenido en cambio, ni podía tener, era voluntad apaciguadora.

Resulta importante hacer referencia de seguidas a lo que, para mayor desorientación de la izquierda, significara que Leoni aprovechara las fisuras que venía experimentando el frente armado con el fin de promover un conjunto mucho más numeroso de beneficios procesales que los concedidos previamente por el gobierno de Betancourt. En este sentido, y en el marco de la Pacificación, la suya será una política más sistemática aún con respecto a la solución de “casos puntuales”, es decir, del conferimiento de medidas de gracia de carácter parcial y de aplicación selectiva. En este sentido, el gobierno de Leoni había resuelto adoptar una serie de beneficios puntuales a quienes resultaran responsables por la comisión de actividades subversivas y ello sólo sobre la base de que hubiesen expresado con la claridad necesaria su interés por abandonar la actividad armada e incorporarse plenamente a la dinámica democrática.

El hecho de que, según la percepción del propio alto gobierno, no todo el sector revolucionario hubiese dado muestras fehacientes de querer rectificar, corregir su rumbo y renunciar de modo convincente a la vía armada, esto debía interpretarse como una razón adicional para concluir que la única forma correcta de actuar era la de continuar concediendo beneficios en forma selectiva a quienes, como se ha dicho, mostraran la intención, clara y manifiesta, de renunciar al camino de la violencia. En tal sentido, el gobierno se preciaría de poseer los instrumentos adecuados, tales como el indulto presidencial, el sobreseimiento y otras medidas de gracia, para ir aplicándolas de manera progresiva a fin de proceder a revisar los



“Pensar es moverse en el infinito”

juicios de muchos detenidos. Quedaba claro pues, que el gobierno no transigiría ante ninguna fórmula que borrara el delito. Pero, al mismo tiempo, quedaba claro también que Leoni continuaría apegado a esta línea “ancha-basista” en la medida en que se entendiera que era a individuos en particular, y no a todo un movimiento “no pacificado”, al cual se le dispensaban semejantes beneficios.

Ya en cuanto al volumen de indultos y sobreseimientos otorgados durante el gobierno de Leoni vale la pena apuntar por ejemplo que, sólo durante su primer año de gestión (1964-65), estas providencias llegaron a beneficiar de manera directa a doscientos cincuenta presos políticos, principalmente a muchos de quienes se habían visto implicados en las dos fallidas insurrecciones militares motorizadas contra Betancourt durante el año 62, en alianza con la izquierda.

Al margen de que las figuras del indulto y el sobreseimiento estuviesen previstas en la normativa existente, vale la pena hacer referencia a un instrumento que sí sería hechura del propio gobierno de Amplia Base a objeto de hacer buena la oferta pacificadora formulada separadamente por sus tres componentes (AD, URD y el FND) durante la campaña electoral y para ensayar, por ese camino, una alternativa que contribuyese a solucionar el problema de la violencia como método de acción política. Nos referimos a la llamada “Ley de Conmutación de Penas por exilio”, que el Congreso Nacional dio por aprobada el 11 de diciembre de 1964.

A la hora en que se concediera este tipo de conmutación no se estaría actuando conforme al derecho penal sino realizándose un “acto jurídico-político”, lo cual le daba aval a la disposición pacificadora que pretendía mostrar la alianza de gobierno. El hecho de conmutar la pena de prisión por la pena de destierro fue visto como el primer ejemplo de algunas de las medidas puntuales alcanzadas en materia pacificadora entre AD, como partido-eje de la coalición de gobierno, y sus socios URD y FND, prefigurando así lo que implicaría que, a partir de entonces, el oficialismo intentase continuar cocinando el problema guerrillero a fuego lento.

Según la coalición “tripartita”, el hecho de que el delito político pudiera consagrarse como objeto de conmutación, siempre que ello fuese a solicitud del reo, equivalía a la posibilidad de darle cabida a una válvula de escape para distender la presión subversiva y ensayar un paso significativo frente a quienes estaban dispuestos a llegar al diálogo desde los sectores en armas. Ciertamente, a diferencia de la figura del indulto, que sería aplicada en numerosos casos más tarde y que extinguía totalmente la pena, de lo que se trataba en este caso era de variar la índole de la pena en prisión por otra que, al menos relativamente hablando, lucía menos rigurosa, como lo suponía el destierro.

En este sentido hubo incluso quien, como Jorge Olavarría, en calidad de diputado independiente desde las filas de la oposición, la considerara una iniciativa “esencialmente humana” puesto que dejaba en manos de quien otorgaba la gracia la posibilidad de abrir una solución a situaciones de orden político sobre la base de



“Pensar es moverse en el infinito”

una fórmula que le permitía al reo cumplir el resto de la condena sin seguir viéndose sometido a la pena corporal que le fuera impuesta mediante sentencia firme.

Lo interesante de esta ley, apoyada de manera calurosa por el propio Leoni, es que venía a regular un dispositivo constitucional que ya tenía su asiento en el artículo 64 de la Constitución de 1961, según el cual “ningún acto del Poder Público [podía] establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos, salvo como conmutación de otra pena y a solicitud del mismo reo”.

Si se considera que históricamente el extrañamiento había sido utilizado para resolver problemas políticos internos, el nuevo instrumento promovido por la Amplia Base pretendía poner distancias frente a prácticas pretéritas a través de una figura que se aspiraba fuese vista como una especie de exilio *reglado*. La diferencia con relación a otras experiencias del pasado radicaba, pues, en que el extrañamiento no se aplicaría, de acuerdo con esta ley, como un acto discrecional del gobierno sino que se trataba de una facultad con la que contaba el Presidente una vez recibida la solicitud que hiciera el reo de acogerse a tal conmutación.

Visto así, el nuevo instrumento, el cual pretendía promover una modalidad de escarmiento que sustituyera la pena de carácter corporal por el destierro, presuponia necesariamente, como ya se ha dicho, que ésta no sólo se hiciera efectiva a partir de la aquiescencia del reo sino que, además, a la hora de implementarse, fuese por un tiempo de duración incluso menor (según fuera el caso) del que faltare por cumplir la condena.

Aparte de sustituirse la pena corporal por la vía de esta Ley de Conmutación de Penas, y amén de los restantes recursos de gracia (indultos o sobreseimiento de procesos militares) puestos en práctica durante distintos momentos del quinquenio de Leoni sobre la base de las atribuciones discrecionales con las que contaba el Presidente, tampoco puede perderse de vista, al menos por el peso simbólico que ello revistió, que uno de los pasos previos en el camino hacia la legalización definitiva, y a la vez una de las medidas más orientadas hacia el logro de la Pacificación, fuera la “ventana” electoral que habría de abrirse al aún proscrito PCV.

Tal y no otra cosa fue lo que significó que, bajo el nombre de fachada de *Unión para Avanzar* (UPA), los dirigentes del sector “dialogante” del PCV se incorporaran al proceso comicial previsto para diciembre de 1968 y que lo hicieran sobre todo en procura de obtener de nuevo la representación legislativa perdida desde 1963. Obviamente, UPA (admitido así como ente legal durante el último año del mandato de Leoni) significaría también una forma indirecta de rehabilitación de las fuerzas de izquierda.

Uno de los aspectos que más llama la atención acerca de la forma en que culminó este proceso que dio lugar a la creación de UPA es que, a lo largo de su mandato, el propio Leoni pareció haberse distanciado de algún modo de la



“Pensar es moverse en el infinito”

indeclinable exigencia formulada al comienzo del quinquenio de no dar ningún paso que le permitiera al PCV y el MIR recobrar legalmente su entidad colectiva sin antes haberse obtenido el renunciamiento completo del recurso armado. Esto viene a ser clara demostración de la forma en que su gobierno logró beneficiarse poco a poco del amplio boquete que continuaba abriéndose entre los partidarios y los adversarios de la Lucha Armada. La creación de UPA, en lo que al PCV se refiere, así lo demuestra.

La discrecionalidad con que obró Leoni a la hora de indultar total o parcialmente algunos casos, o sobreseer el estado de diversas causas, en cualquier estado en que se hallaran, aun tratándose de procesos ante tribunales militares, habla también, junto a la aprobación de la ley de “De conmutación de penas por extrañamiento del territorio nacional”, del empeño por impulsar una Pacificación por etapas, según lo fueran permitiendo las circunstancias.

Ahora bien, no es cuestión de pasar a la ligera por encima de estos recursos de gracia. Significaron mucho puesto que, al dejarse de aplicar las penas impuestas por los órganos jurisdiccionales, ello servía como aval de una política de entendimiento que, con toda seguridad, llegó a contar en más de una ocasión con la resistencia de las propias Fuerzas Armadas.

Más allá de las pocas cifras que existen, o que han podido recabarse, resulta difícil hacer un cálculo más o menos confiable, más o menos exacto, del número de quienes, por la vía del indulto, el sobreseimiento de juicios o la conmutación de penas por exilio se vieron favorecidos mediante tales beneficios parciales impulsados durante el quinquenio de Leoni.

#### 4.- Conclusiones

Vale la pena puntualizar algunas cosas al cierre, sobre todo a la hora de desmentir ciertas falsedades de común circulación en torno al proceso que ha querido examinarse hasta este punto.

En primer lugar, tanto como lo hizo a favor de que se ampliaran los esfuerzos de diálogo, Leoni apostó a la Pacificación, pero no al “apaciguamiento”.

En segundo lugar, ese intento de Pacificación, o de “proto” Pacificación (para darle relieve así a su carácter embrionario) fue un logro que terminó viéndose diluido en buena medida como resultado del triunfo electoral que condujo a Rafael Caldera a la Presidencia en 1969. No puede perderse de vista en este sentido que tanto el líder copeyano como su partido hicieron de la Pacificación una de sus principales ofertas electorales durante la campaña para suceder a Leoni, derivando de ello el mayor rédito posible luego del triunfo comicial. Sin embargo, pese al cartel que



“Pensar es moverse en el infinito”

gozara la Pacificación en tiempos de Caldera, sería un serio error considerar que la violencia simplemente se eclipsó a partir de entonces. De hecho, el fin de la violencia armada no fue el fácil tránsito que cabe suponer, o sobre el cual insistiría más tarde la mitología copeyana, puesto que subsistirían, aunque reducidos ya a minúscula expresión, algunos grupos que habrían de persistir en la empresa insurreccional hasta bien entrada la década de los años setenta.

En tercer lugar, no puede perderse de vista que, ante el nuevo aire que cobrara la Pacificación, y a raíz de lo que parecía ser un simpático baile entre la izquierda pacificada y Caldera, era llegada la hora (y ello estaba en el interés de ambas parcelas) de enfiar de consuno las baterías contra AD luego de diez años de gobierno y, también (aunque a Copei le costase un tanto desmarcarse como socio que fuera del gobierno de Betancourt), para poner todo el acento del fenómeno insurreccional sobre su “desacertado” e “ineficaz” manejo durante el decenio Betancourt/Leoni. Luego de semejante aluvión “anti-adeco”, y a los efectos de la posteridad, no hay duda de que la “proto” Pacificación impulsada por el mandatario guayanés quedó prontamente relegada a un segundo plano.

En cuarto lugar no sobra ni lastima insistir en lo dicho en algún momento acerca del hecho de que, si bien existía un programa conjunto entre ambos gobiernos, hubo importantes diferencias entre los estilos de Betancourt y Leoni, como también las hubo en relación al tipo de violencia que caracterizó a cada uno de ambos gobiernos. A este respecto cabría hacer énfasis nuevamente en lo que significara el repertorio insurreccional (incluyendo la opción cuartelaria entre 1960 y 1962) que manejó la izquierda armada durante el quinquenio de Betancourt.

Finalmente, y sumado a las medidas de gracia acordadas por Leoni, asoma lo referido al empeño que tuvo su gestión por intentar mejorar el clima imperante de manera progresiva. Pero también destaca en este sentido como algo digno de nota la disposición mostrada por el sector “dialogante” del PCV a la hora de propugnar una tesis como la “Paz Democrática” que, sin renunciar total ni expresamente a la vía armada, estimulaba la posibilidad de que la gestión del guayanés ensayase un camino diferente frente a una violencia heredada del pasado inmediato.